



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-008-2018-00340-03 (O2-22-344)
Demandante: HERNANDO DE JESÚS ZAPATA OSORNO
Demandadas: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A.S. Y MISIÓN EMPRESARIAL S.A.
Procedencia: JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: AUTO INTERLOCUTORIO No.069 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
Asunto: LIQUIDACIÓN DE COSTAS

En Medellín, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado en el proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-008-2018-00340-03 (O2-22-344), instaurado por **HERNANDO DE JESÚS ZAPATA OSORNO** en contra de la **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A.S. y MISIÓN EMPRESARIAL S.A.** en punto a resolver el Recurso de Apelación propuesto por las sociedades demandadas, contra la liquidación de costas aprobada el 18 de julio de 2022 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín.

1. ANTECEDENTES

El señor HERNANDO DE JESÚS ZAPATA OSORNO, actuando por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A.S. y MISIÓN EMPRESARIAL S.A. en orden a que se declarara que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, y se ordene su reintegro, junto el pago de los salarios insolutos, y la sanción de 180 días de salario, o que, en subsidio, se reconozcan las horas extras, las prestaciones sociales de Ley y las vacaciones causadas durante la vigencia de la relación laboral, las indemnizaciones por el no pago de las prestaciones sociales, por la no consignación de las cesantías, y por despido injusto, y la indexación de las condenas.

La COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A.S. y MISIÓN EMPRESARIAL S.A. excepcionaron de forma previa la indebida acumulación de pretensiones, discusión preliminar que se dirimió en primera instancia el 03 de marzo de 2020 (págs.350-353, doc.01, carp.01; doc.03, carp.01), mediante auto interlocutorio en el que se declaró no probado el medio exceptivo incoado, y se condenó en costas a las sociedades demandadas, fijando las agencias en derecho en \$1.755.606, a prorrata; decisión que fue confirmada el 26 de febrero de 2021 (págs.387-393, doc.01, carp.01), por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, proveído con el que se gravó en costas a las compañías demandadas, fijando las agencias en derecho en la suma de \$227.131, a prorrata.

La controversia de fondo planteada se dirimió en primera instancia el 10 de agosto de 2021 (docs.15-16, carp.01), por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia en la que se absolvió a la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A.S. y a MISIÓN EMPRESARIAL S.A. de todas y cada una de las pretensiones incoadas por el señor HERNANDO DE JESÚS ZAPATA OSORNO, y se condenó en costas al demandante. La segunda instancia se desató el 23 de mayo de 2022 (doc.06, subcarp.01, carp.02) por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en sentencia que adicionó la decisión de primer grado, y declaró que entre el señor HERNANDO DE JESÚS ZAPATA OSORNO y la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A.S., existieron dos contratos de trabajo a término indefinido, el primero, entre el 24 de octubre de 2008 y el 21 de diciembre de 2010, y el segundo, entre el 14 de febrero de 2011 y el 14 de octubre de 2015, en los cuales, MISIÓN EMPRESARIAL S.A., actuó como simple intermediaria; condenó solidariamente a la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A. y a MISIÓN EMPRESARIAL S.A., a pagar en favor del demandante la suma de \$2.246.872, por concepto de indemnización por despido injusto; absolvió a sociedades demandadas de las demás pretensiones incoadas; fijó la condena en costas para la primera instancia a cargo de las compañías demandadas; y no impuso condena en costas para la segunda instancia.

1.1. Trámite de Primera Instancia

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, en la fecha 18 de julio de 2022 (doc.18, carp.01) emitió el auto de cúmplase lo dispuesto por el superior funcional, y dispuso que por la Secretaría del despacho se liquidaran las costas del proceso, las cuales se liquidaron a cargo de COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A.S. y MISIÓN EMPRESARIAL S.A. en la suma de \$2.421.642, discriminadas en \$2.194.505 por agencias en derecho para la primera instancia, desagregadas en \$1.755.606 por haberseles resuelto desfavorablemente la excepción previa, y \$438.902 por haber sido vencidas en el proceso; más \$227.132 por agencias en derecho para la segunda instancia, por haberles resuelto en disfavor el recurso

de apelación impetrado en contra del auto que declaró no probada la excepción previa; liquidación sobre la que se impartió aprobación en la misma fecha.

1.2. Recurso de Apelación

Inconforme de la decisión antes descrita, el apoderado judicial de la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A.S. y MISIÓN EMPRESARIAL S.A, en la fecha 28 de julio de 2022 (doc.19, carp.01), interpuso recurso de apelación con fundamento en que no existe proporcionalidad entre las costas liquidadas por valor de \$2.421.640, y las condenas impuestas por la suma de \$2.246.872, especialmente si se tiene en cuenta el valor asignado a las agencias en derecho por la excepción previa, desconociendo que el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 establece que la liquidación de las costas y agencias en derecho no puede ser superior al 7,5% del valor condenado.

1.3. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación se admitió el 19 de septiembre de 2022 (doc.02, sub carp.02, carp.02), y mediante proveído del día 26 del mismo mes y año (doc.03, sub carp.02, carp.02), se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo necesario, sin que ninguna de partes hubiere radicado alegaciones finales.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A.S. y MISIÓN EMPRESARIAL S.A, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema Jurídico

El punto neural del debate se contrae en determinar si la liquidación de las agencias en derecho causadas en el trámite del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por HERNANDO DE JESÚS ZAPATA OSORNO, en contra de la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A.S. y MISIÓN EMPRESARIAL S.A se ajusta o no a la normativa que regula la materia.

2.2. Tesis de la Sala

La Sala modificará la decisión de primer grado, y en su lugar, fijará las agencias en derecho de la primera instancia en suma equivalente al 5% de la condena en concreto impuesta, en razón a que dicho monto se ajusta a los parámetros fijados por el Consejo Superior de la Judicatura, y corresponde a un criterio más equitativo, razonable, prudente y proporcional, respecto de la naturaleza, calidad y la duración de la gestión profesional desplegada.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La Corte Constitucional ha entendido que las costas corresponden a aquellos gastos en que incurren las partes en razón del proceso, noción que comprende tanto las expensas como las agencias en derecho [C-043 de 2004]. En esta materia el ordenamiento procesal adoptó un criterio objetivo, no solo para la imposición de la condena, en tanto se condena en costas al vencido en el proceso, incidente o recurso, independientemente de las causas del vencimiento [C-480 de 1995], sino también para la tasación de aquellas, en cada uno de sus componentes, siguiendo en este punto la teoría moderna procesal, pues, como lo ha señalado la doctrina *“... la característica moderna del principio de condena en costas consiste precisamente en hallarse condicionada al vencimiento puro y simple, y no a la intención ni al comportamiento del vencido (mala fe o culpa)”* [José Chiovenda, La Condena en Costas, trad. Juan de la Puente y Quijano, Tijuana, B.C, 1985, pág. 220].

En relación con la condena en costas, el artículo 365 del CGP, aplica el *dictum romano*, según el cual, quien ha sido vencido en un proceso judicial, debe pagar al vencedor los gastos o costas del juicio, y justo en ese sentido, ha dicho la doctrina que las costas equivalen a *“... la carga económica que debe afrontar quien no tenía razón [en el juicio] motivo por el cual obtuvo decisión desfavorable y comprende, a más de las expensas erogadas por la otra parte, las agencias en derecho, o sea el pago de los honorarios de abogado que la parte gananciosa efectuó, y a la que deben ser entregados”* [Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento Civil, Tomo I, p. 1032].

En cuanto a la condena en costas, el artículo 365 del CGP prevé lo siguiente:

“Artículo 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción" (Subrayas de la Sala)

Ahora bien, las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, el transporte, alimentación y alojamiento del personal que intervenga en las diligencias que se practiquen por fuera del despacho judicial, y los aranceles, entre otros, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles, y correspondan a actuaciones autorizadas por la Ley (artículo 364 del CGP). Por su parte, las agencias en derecho corresponden a los gastos que se generan por concepto de apoderamiento, los cuales el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora, atendiendo a los criterios sentados en el artículo 366 del CGP, y que no necesariamente deben corresponder a los honorarios reconocidos y pagados por dicha parte a su abogado [C-539 de 1999].

En torno de la liquidación de dichos conceptos el artículo 366 del CGP se estatuye:

“Artículo 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obediencia a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:

1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.

2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso.

3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.

Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará.

4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquéllas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.

5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho sólo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto suspensivo” (Subrayas de la Sala).

Para los efectos antes descritos, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el **Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016**, aplicable al caso objeto de análisis, y en relación con el asunto que nos ocupa fijó las siguientes tarifas de agencias en derecho para el área laboral:

“Artículo 5. TARIFAS. Las tarifas de agencias en derecho son:

1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL

<i>En única instancia</i>	<i>a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido.</i> <i>b. En aquellos autos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 smlmv.</i>
<i>En primera instancia</i>	<i>a. <u>Por cuantía: Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario</u></i> <i>(i) <u>De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.</u></i> <i>(ii) <u>De mayor cuantía; entre el 3% y el 7,5% de lo pedido.</u></i> <i>b. <u>Por la naturaleza del asunto: En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 smlmv.</u></i>
<i>En segunda instancia</i>	<i>Entre 1 y 6 smlmv". Subrayas de la Sala)</i>

Es claro entonces, que las normas señaladas establecen criterios de carácter cualitativo y cuantitativo para que el juzgador fije tales agencias, sin que se pueda imponer de manera automática el valor de dicha importe, pues simplemente orientan al juez para que éste, haciendo un ejercicio discrecional ponderativo, fije un monto que considere equitativo, razonable, prudente y proporcional con el valor de la condena o la absolución impartida, justipreciando la duración y calidad de la gestión profesional realizada en el transcurso del proceso, teniendo como límites máximo y mínimo los fijados por la ley y reglamentos, pero sin que ello signifique que el fallador esté condicionado a fijar como agencias el tope máximo referenciado, sino que tal condena puede ondear entre los límites mínimo y máximo que la normatividad en mención contempla.

Una vez revisado el expediente, la Sala advierte que la demanda se radicó el 12 de junio de 2018 (pág.01, doc.01, carp.01), se admitió el 22 de junio de 2018 (págs.224-225, doc.01, carp.01), se notificó a la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A.S., el 18 de diciembre de 2018 (pág.253, doc.1, carp.01), y a MISIÓN EMPRESARIAL S.A. el 30 de abril de 2019 (pág.284, doc.01, carp.01), se dirimió en primera instancia el 10 de agosto de 2021 (dosc.15-16, doc.01, carp.01), y el recurso de alzada se desató el 23 de mayo de 2022 (doc.06, subcarp.01, carp.02).

También se constató que la actuación desplegada por el apoderado judicial de la parte actora, consistió en la presentación de la demanda (págs.04-26, doc.01, carp.01), el envío de la citación para la notificación personal (págs.226-231, 232-234, 235-237, doc.01, carp.01), el envío de la citación para la notificación por aviso (págs. 238-244, 245-252, doc.01, carp.01), la solicitud de emplazamiento de MISIÓN EMPRESARIAL S.A. (pág.281, doc.01, carp.01), la

comparecencia e intervención a la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación el litigio y decreto de pruebas (págs.350-353, doc.01, carp.01; doc.03, carp.01), y la comparecencia e intervención a la audiencia de trámite y juzgamiento, en la que formuló el recurso de apelación (docs.15-46, carp.01).

Adicionalmente, se encuentra acreditado que el proceso de la referencia es de naturaleza ordinaria, siendo que las pretensiones incoadas (intermediación laboral, fuero de estabilidad laboral reforzada, prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones) no tienen establecido un procedimiento especial, y de mediana complejidad, por tratarse de una controversia que requirió de la práctica de pruebas documentales, testimoniales y de interrogatorio de parte.

Finalmente, se tiene evidenciado que la primera instancia se surtió en 1.155 días, y que la decisión que resolvió en definitiva la controversia, esto es, la sentencia de segunda instancia, se emitió 1.441 días después de la fecha en la que se radicó la demanda, lo que significa que **el trámite del proceso tuvo una duración superior a los cuatro (4) años.**

Así las cosas, la Sala considera que el monto fijado por concepto de agencias en derecho para la primera instancia a cargo de la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A.S. y MISIÓN EMPRESARIAL S.A., esto es, la suma de \$1.755.606 por habérseles resuelto desfavorablemente la excepción previa, y la suma \$438.902 por haber sido vencidas en el proceso, realmente da cuenta de un ejercicio ponderativo equitativo, razonable, prudente y proporcional, a juzgar por la naturaleza, calidad y la duración útil de la gestión desplegada, siendo conveniente indicar que las primeras equivalen a un (1) SMLMV (2020 = $\$877.803 \times 2 = \$1.755.606$), y que las segundas, aunque corresponden al 19,53% de la condena impuesta a cargo de cada una de las demandadas ($\$2.246.872 \times 19,53\% = \438.902), siguen siendo inferiores a un (1) SMMLV para la fecha en la que se profirió la condena (2022=1.000.000), esto es, en ninguno de los casos se fijó a cargo de cada una de las demandadas agencias superiores a un (1) SMMLV.

Y como en el proceso de la referencia no solo alcanzó prosperidad la pretensión de contenido pecuniario referida al reconocimiento y pago de la indemnización por despido injustificado, sino también la pretensión declarativa de contrato realidad o intermediación laboral irregular, la cual carece de cuantía, resulta completamente atendible que para fijar las agencias en derecho de la primera instancia se hubiera aplicado la regla prevista en el literal b) del numeral 1° del artículo 5° del Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016, según el cual, *"... en aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, [las agencias en derecho son] entre 1 y 10 SMLMV"*, y como de las agencias liquidadas por la *a quo* en ninguno de los

casos supera si quiera el límite mínimo establecido en un (1) SMMLV, no se evidencian fundamentos normativos ni fácticos válidos para revocar el proveído confutado.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º, artículo 365 del CGP, no se impondrán costas procesales en esta instancia, por no haberse causado, y en la medida de su no comprobación.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**, Sala Quinta de Decisión Laboral,

4. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la liquidación de costas aprobada el 18 de julio de 2022 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por HERNANDO DE JESÚS ZAPATA OSORNO contra la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A.S. y MISIÓN EMPRESARIAL S.A., de acuerdo con la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, en los términos previstos en el artículo 41 literal c) del estatuto instrumental laboral.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara surtida la presente audiencia y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.


VÍCTOR HUGO ORIUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
Magistrada


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

**LA SECRETARIA DE LA SALA LABORAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN CERTIFICA:**

Que esta providencia fue notificada en los
ESTADOS No.215, fijados en la secretaría del
Tribunal, hoy **29 de noviembre de 2022** a las
08:00am, los cuales pueden ser consultados en
["Publicación de Estados Electrónicos SL-TSM"](#)

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario